

Acceso al archivo de una Diputación. Informe 49/2006

La consulta solicita de esta Agencia Española de Protección de Datos la autorización a los efectos de, en primer lugar, examinar el Libro de Partos de la Casa de Cuna, pertenecientes al Archivo General de la Diputación, por parte de aquellas personas que estuvieron acogidas como expósitos y en segundo lugar que se exonere de incurrir en responsabilidad al Responsable del Archivo en caso de conceder el acceso a los documentos.

Con carácter previo, conviene señalar que, si bien dentro de las competencias atribuidas a esta Agencia de Protección de Datos se encuentra, según establece el artículo 37.1.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la de “proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal”, en modo alguno tal atribución puede considerarse que lleva aparejada la competencia para dictar resoluciones o informes con efecto vinculante.

Frente a dicha consideración, procede señalar que no entra dentro de las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por el artículo 37.1 LO 15/1999 la de autorizar o denegar el acceso planteado en la consulta, debiendo la misma limitarse a señalar si el acceso se encuentra amparado en la citada Ley Orgánica.

Dicho esto, en relación con las peticiones que recibe el Archivo General de la Diputación, de averiguación de la ascendencia biológica por parte de aquellas personas que estuvieron acogidos como expósitos y adoptadas legalmente con posterioridad, suponen una comunicación de datos.

El acceso por terceros a la documentación a la que se refiere la consulta supondría una comunicación de datos, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Con carácter general, y en lo que se refiere a la comunicación de los datos a los que se refiere la consulta, según dispone el artículo 11.1 de la Ley 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

El consentimiento sólo podrá verse exceptuado en los supuestos establecidos en el artículo 11.2) de la LO 15/1999, de los que resultan relevantes a efectos de nuestro estudio el apartado a), referido el primero a la existencia de una norma habilitante que tenga rango de Ley.

Dado que la consulta se refiere a archivos y fondos documentales, sería de aplicación la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español de Patrimonio Histórico Artístico.

Debe señalarse que el artículo 49.2 de la citada ley establece que “Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

A su vez, el artículo 57. 1 de la misma norma señala que “La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio documental Español a que se refiere el artículo 49. 2 se atenderá a las siguientes reglas:... b) los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico, o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos”.

Por otro lado el artículo 72.1 a) de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, Ley 1/1991 de 3 de julio que modifica la regulación del artículo 27 c) de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos de Andalucía, se pronuncia en términos semejantes:«c) En el supuesto de que la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas físicas, la consulta de los documentos no podrá realizarse sin consentimiento expreso de los afectados o hasta que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.»

Como no es posible determinar si la persona respecto de la que se solicitan los datos, ha fallecido o no, será de aplicación el último apartado del precepto citado. Por ello habrá que computar si han transcurrido cincuenta años desde la fecha del documento.

Dada la fecha de nacimiento de la persona que solicita la consulta, 4 de octubre de 1955, el 4 de octubre de 2005 habrían transcurrido los cincuenta años previstos en la normativa antes citada, permitiéndose entonces el acceso a la documentación solicitada.

A la vista de los preceptos citados, y siempre que se cumplan los requisitos de plazo que los mismos establecen, sería posible la consulta, en la forma que determinen las normas reguladoras del acceso a los Registros y Archivos que los custodien.